

Expediente: 2093/14
Carátula: **ALDERETE MARIO GERARDO C/ ORTIZ REPUESTOS S.R.L. S/**
Descripción: **SENTENCIA DEFINITIVA**
Unidad Judicial: **JUZGADO DEL TRABAJO II**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL

JUZGADO DEL TRABAJO II

ACTUACIONES N°: 2093/14



H103022761170

JUICIO: ALDERETE MARIO GERARDO C/ORTIZ REPUESTOS SRL S/COBRO DE PESOS - EXPTE 2093/14

San Miguel de Tucumán, 30 de Abril de 2021.

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados “Alderete Mario Gerardo c/ Ortiz Repuestos SRL s/ Cobro de Pesos, Expte. 2093/14” que tramitan por ante éste Juzgado del Trabajo de la II Nominación, de donde

RESULTA

DEMANDA: A fs. 2 se apersona el letrado Alberto Toro, con el patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino, para actuar en nombre y representación del Sr. Mario Gerardo Alderete, DNI 24.200.455 con domicilio en Entre Ríos N° 280 El Manantial de ésta ciudad Capital.

Inician demanda por cobro de pesos en contra de Ortiz Repuestos SRL con domicilio en calle San Juan N° 1198 de San Miguel de Tucumán, por la suma de \$333.191,19 en concepto de **(i)** Indemnización por Antigüedad, **(ii)** Preaviso, **(iii)** SAC s/ Preaviso, **(iv)** Diferencias 20 días Mayo/13, **(v)** Integración mes de despido, **(vi)** Vacaciones Proporcionales 2013, **(vii)** Diferencias SAC proporcional 2013, **(viii)** Indemnización art. 80 LCT, **(ix)** Indemnización art. 2 ley 25.323, **(x)** Diferencias de Haberes entre Mayo 2012 y Abril 2013 inclusive, y se haga entrega de la certificación de servicios y certificado de trabajo conforme a las verdaderas condiciones laborales del actor.

Comienza el relato de los hechos manifestando que la demandada es titular de un negocio de repuestos para artículos del hogar (heladeras, lavarropas, cocinas, calefones), cuya sede principal queda ubicada en José Colombres N° 281 con una sucursal en calle San Juan N° 1198, siendo éste último el ámbito físico de desempeño de las actividades del actor. Así, el Sr. Alderete ingresó a trabajar para la demandada en el mes de Febrero del año 1992, desempeñándose en forma continuada e ininterrumpida hasta el cese de la relación laboral producida en fecha 29/05/2013 por despido indirecto configurado por exclusiva culpa de la accionada.

Destacan que al inicio de la relación laboral figuraba como titular del establecimiento el Sr. Enrique Cesar Ortiz, hermano del Sr. Manuel Ortiz, socio gerente de la demandada. Esa situación se mantuvo hasta el 01/09/08, fecha en la cual comenzó a figurar la demandada Ortiz Repuestos SRL como titular de la relación laboral y del negocio. Así, el actor siempre desempeñó las mismas tareas, en el mismo lugar y bajo las órdenes e instrucciones del Sr. Manuel Ortiz.

Las tareas que desempeñaba el actor fueron las de vendedor con atención al público, estando categorizado como vendedor “B” del CCT 130/75. Su jornada de trabajo era de 8 a 12:30 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 8:30 a 13. Encontrándose deficientemente registrado como empleado de jornada parcial. Percibió en concepto de remuneración la suma de \$2.693,97, correspondiente al mes de Mayo/13, último período abonado, estando muy por debajo del básico convenio para su categoría profesional, fecha de ingreso y jornada laboral. Se desempeñó como empleado de carácter permanente, no recibió especialización salvo la derivada de su experiencia

práctica, no siendo apercibido ni sancionado por ningún motivo.

Respecto al distracto, expresan que en fecha 24/05/13 la demandada remitió TCL al actor intimándolo a reintegrarse a su lugar de trabajo bajo apercibimiento de ser considerado abandono de trabajo. En igual fecha, el actor remitió TCL a la accionada intimando a que regularice su situación laboral ante la negativa de permitirle el ingreso a su lugar de trabajo, registrándolo en el libro de remuneraciones, Anses, obra social y sindicato de acuerdo a sus verdaderas condiciones de trabajo, bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido en los términos del art. 242 de la LCT. Asimismo, dejó constancia que los demandados violaron el deber de previsión previsto en la LCT, incumpliendo normas elementales que hacen la relación empleado-empleador y obligaciones a su cargo, y habiendo sido objeto de constantes malos tratos, persecuciones y hostigamientos por parte del Sr. Manuel Antonio Ortiz, intimó en forma inmediata en virtud del aludido principio de previsión previsto en la LCT a cesar en su actitud y cumplir con sus obligaciones a su cargo.

Como respuesta al TCL del demandado, el actor en fecha 28/05/13 remitió telegrama rechazando el mismo y ratificó su despacho telegráfico. Negó que puedan intimarlo a que se presente a trabajar ya que no le permitieron el ingreso a su lugar de trabajo. Por ello, intimó nuevamente a que se le aclare su situación laboral conforme sus verdaderas condiciones de trabajo bajo apercibimiento de los arts. 242 y 246 de la LCT. Asimismo, en fecha 29/05/13 remitió misiva a los demandados rechazando la carta documento de fecha 28/05/13 por ser improcedente, carecer de sentido fáctico y jurídico y ser de mala fe y ratificó sus despachos telegráficos anteriores. Por ello, se consideró injuriado y despedido por exclusiva culpa de los demandados en los términos del Art. 242 de la LCT.

En fecha 30/05/13 la demandada remitió carta documento rechazando el TCL del actor y ratificando sus misivas anteriores. Negó que el actor se haya presentado a trabajar como falazmente afirmó y lo intimó nuevamente a hacer ocupación efectiva en su puesto de trabajo. Negó que el accionante pueda darse por injuriado y despedido pues aún se encontraba en reserva su puesto de trabajo. Asimismo, le manifestó que la inasistencia injustificada provoca una deficiencia en el desempeño de sus funciones y constituyen una violación de su parte a los deberes que le imponen los arts. 62, 63, 84, 85 y concordantes de la LCT, por lo que negó que pueda darse por despedido en los términos del art. 242 LCT y que haya habido injuria de su parte. Por último, negó que se le adeuden las indemnizaciones pretendidas por el actor y lo intimó a presentarse en su lugar de trabajo en el plazo perentorio e improrrogable de 24 hs bajo apercibimiento de configurarse un abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT.

Ante ello, el actor remitió TCL en fecha 30/06/13 rechazando la misiva del 30/05/13 del demandado. Ratificó sus telegramas remitidos anteriormente y el despido configurado por su parte. Negó los hechos expuestos por la demandada e intimó nuevamente los rubros adeudados como así también la entrega de la certificación de servicios correspondiente. Como consecuencia de ello, el día 04/06/13 la accionada remitió CD rechazando el telegrama mencionado anteriormente y negó todos los dichos del actor. Asimismo, por sus reiterados comportamientos que afectaron seriamente su desempeño de sus funciones llevó a la pérdida de confianza hacia su parte. Por otro lado, su incumplimiento con la obligación de reintegrarse a su puesto de trabajo configuró el despido por justa causa por abandono de trabajo en los términos del art. 242 de la LCT, por lo que puso la liquidación final no indemnizatoria y certificación de servicios a su disposición.

En fecha 05/06/13 el Sr. Alderete remitió TCL rechazando la última misiva del demandado y el despido invocando por ésta. Ratificó sus anteriores despatches telegráficos como así también el despido indirecto configurado por su parte e intimó al pago de las indemnizaciones y entrega de certificación correspondientes. Finalmente, en fecha 06/10/13 remitió un último telegrama intimando por última vez al pago de los rubros indemnizatorios que por derecho le correspondan bajo apercibimiento de los términos del art. 2 de la ley 25.323.

Finaliza su escrito inicial adjuntando planilla de liquidación de los rubros pretendidos; funda su derecho en la LCT, CCT 130/75 y ley 25.323. Solicita el apartamiento del criterio de la tasa pasiva y adjunta documentación.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA: A fs. 78 se apersona el letrado Mario Enrique Chehuan Gandur adjuntando Poder General para Juicios a fs 103/104 para actuar en nombre y representación del Sr. Manuel Antonio Ortiz DNI 7.091.455 y contesta demanda negando todos y cada uno de los hechos invocados por el actor en su escrito inicial.

Manifiesta que la antigüedad denunciada por el actor es errónea toda vez que la firma Ortiz Repuestos SRL fue constituida en Octubre del 2007 conforme Contrato Societario y demás inscripciones en organismos provinciales y nacionales. Asimismo, reconoce que revestía la calidad

de Vendedor “B” pero solo de media jornada y no completa como manifestó el accionante, conforme a los recibos de sueldos y registro único debidamente firmados y conformados por el demandante.

Finaliza su contestación expresándose acerca de la supuesta continuidad comercial, legal e impositiva entre Ortiz Repuestos SRL y el Sr. Enrique Cesar Ortiz, niega la misma y expresa que no existe ningún vínculo que así lo determine, obrando en su poder acta de clausura y multa emanada por la AFIP en la que se deja sin efecto la misma ya que no existe vínculo alguno entre los sujetos.

APERTURA A PRUEBAS: La causa es abierta a pruebas a fs. 116, habiendo ofrecido ambas partes medios probatorios.

DESCONOCIMIENTO DOCUMENTAL: A fs. 129, la parte actora realizó expreso desconocimiento de la documentación acompañada por la demandada, en particular: las copias de Registro Único de Sueldos mensuales en cuanto al contenido, autenticidad y firma; copia de las actuaciones realizadas por el AFIP; copia de la planilla de Relevamiento de Trabajadores de la Dirección General de Rentas.

AUDIENCIA ART. 69: Las partes concurrieron a la audiencia de conciliación a fs. 131, pero no arribaron a acuerdo alguno.

FALLECIMIENTO DEMANDADO: A fs. 133 el letrado ChehuanGandur denunció el fallecimiento del socio gerente de Ortiz Repuestos SRL, el Sr. Manuel Antonio Ortiz (acta de defunción a fs. 132).

APERSONAMIENTO: La letrada Graciela Corai se apersona de urgencia a fs. 145 como apoderada general para juicios de Ortiz Repuestos SRL. Asimismo, acompaña copia del contrato social de la SRL (fs. 138/142) manifestando que en la cláusula Sexta del mismo consta que el Sr. Manuel Antonio Ortiz era socio Gerente de la Sociedad, por lo que debido a su defunción la sociedad se encontraba acéfala, por lo que acompañó copia del pedido de asignación de administradora provisoria de la Sra. Elvira del Valle Acuña (cónyuge supérstite), el cual al día de la presentación no se encontraba resuelto.

INFORME ART. 101 CPL: el actuario informó sobre la actividad probatoria realizada en autos a fs. 414.

ALEGATOS Y AUTOS PARA SENTENCIA: Los alegatos de la parte actora glosan a fs. 417, los de la demandada a fs. 425. Así, quedaron los presentes autos en condiciones de ser resueltos.

RENUNCIA LETRADA: A fs 432 la letrada Graciela Corai renunció a la representación de la demandada, por lo que se intimó a ésta a apersonarse con nuevo apoderado, intimación que no fue cumplida por lo que se le aplicó el apercibimiento del art. 22 del CPL (fs. 442).

CONSIDERANDO

HECHOS RECONOCIDOS POR LAS PARTES:Conforme los términos de la demanda y su responde, constituyen hechos admitidos por las partes y, por ende, exentos de prueba: **a)** la existencia de la relación laboral entre las partes; **b)** la aplicación del CCT 130/75, y la categoría profesional del actor como Vendedor “B” según dicho convenio.

CUESTIONES CONTROVERTIDAS O DE JUSTIFICACIÓN NECESARIA: En mérito a todo lo expresado precedentemente y encontrándose los presentes autos en condiciones de ser resueltos, entiende este sentenciante que corresponde determinar como puntos contradictorios a tratar a aquellos hechos que requieren un previo análisis de la plataforma fáctica de autos y poder así llegar a dilucidar la verdad objetiva del caso, encuadrando los supuestos probados dentro de las normas aplicables al caso concreto.

En consecuencias, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme, conforme el art. 265 inc. 5 del CPCCT (supl.) son: **1.-** Características de la relación laboral: Fecha de ingreso y Jornada Laboral. **2.-** Distracto: Fecha, Causa y justificación. **3.-** Procedencia, o no, de los rubros reclamados.

PRIMERA CUESTIÓN: Características de la relación laboral: Fecha de ingreso y Jornada Laboral.

1.- Manifiesta la parte actora que ingresó a trabajar para la demandada en el mes de Febrero del año 1992, desempeñándose en forma continuada e ininterrumpida hasta el cese de la relación laboral producida en fecha 29/05/2013. Destaca que al inicio de la relación laboral figuraba como titular del establecimiento el Sr. Enrique Cesar Ortiz, hermano del Sr. Manuel Ortiz, socio gerente de la demandada. Esa situación se mantuvo hasta el 01/09/08, fecha en la cual comenzó a figurar la demandada Ortiz Repuestos SRL como titular de la relación laboral y del negocio.

2.- Por su parte, la parte demandada expresó que la antigüedad denunciada por el actor es errónea toda vez que la firma Ortiz Repuestos SRL fue constituida en Octubre del 2007 conforme Contrato Societario y demás inscripciones en organismos provinciales y nacionales.

3.- Planteada así esta primera cuestión, corresponde en forma preliminar, verificar y examinar además de las cuestiones propuestas, también el plexo probatorio rendido en autos, para luego ingresar a ponderar y valorar las pruebas que considero conducentes para la resolución del caso. Así, en primer lugar mencionaré las producidas por la actora.

3.1.- INSTRUMENTAL: El actor a fs. 165 presenta como prueba instrumental las constancias de autos, en especial la documentación acompañada con la demanda.

3.2.- INFORMATIVA: La Dirección General de Rentas informa lo solicitado por el actor a fs. 183/186; la S.E.T. informó a fs. 192/215; la Municipalidad de Tucumán informó a fs. 217/220; el Correo Oficial informó a fs. 222/238; el Registro Público de Comercio informó a fs. 235/236;

3.3.- TESTIMONIAL: Los testigos Gutiérrez Walter Gustavo (fs. 251), Coronel Ángel Arnaldo (fs. 252) y Paz Orlando Marcelo (fs. 267) comparecieron en autos a contestar las preguntas propuestas por el actor a fs. 242. Los mismos no fueron objeto de tachas.

3.4.- EXHIBICIÓN: La demandada fue intimada mediante cédula de fs. 281 a presentar la documentación solicitada mediante escrito de fs. 277. Sin perjuicio de ello, la accionada no cumplió con la misma, por lo que la actora solicitó a fs. 286 el apercibimiento dispuesto en el art. 61 y 91 del CPL.

4.- Finalizada la mención y el análisis de las pruebas producidas por la parte actora, corresponde continuar con las de la demandada:

4.1.- DOCUMENTAL: A fs. 288 la demandada presenta como prueba documental las documental adjuntada en autos, la contestación de demanda y todo lo que sea favorable a su mandante.

4.2.- INFORMATIVA: La S.E.T. informó a fs. 297 lo solicitado; el AFIP remitió Aportes Previsionales del Sr. Alderete a fs. 299/320; el Anses informó a fs. 322; el Correo Oficial informó a fs. 324/327.

4.3.- ABSOLUCIÓN DE POSICIONES: La audiencia confesional no se llevó a cabo debido a que la parte demandada no diligenció la cédula a Juez de Paz para notificar al actor.

4.4.- PERICIAL CONTABLE: La presente prueba no fue producida.

4.5.- RECONOCIMIENTO: La audiencia de reconocimiento no se llevó a cabo debido a que la parte demandada no diligenció la cédula a Juez de Paz para notificar al actor de la misma.

4.6.- TESTIMONIAL: Los testigos Jaime Alberto Damián (fs. 375), Silva Marcelo Walter (fs. 396) y Silva Pablo Leonardo (fs. 397) comparecieron en autos a contestar las preguntas presentadas por la demandada a fs. 371. Asimismo, los mencionados testigos fueron tachados por la parte actora.

5.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: Continuando con el análisis de esta primera cuestión, y teniendo en cuenta el plexo probatorio enunciado en los apartados anteriores, se ingresará al examen, ponderación y valoración de las pruebas; pero no sin antes recordar las líneas directrices trazadas por el Máximo Tribunal de la Nación, en el sentido que *por el principio los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas las cuestiones que proponen a su consideración, ni a tratar una por una todas las pruebas ofrecidas y producidas, sino tan solo deben analizar y ponderar las cuestiones y pruebas que consideren relevantes o conducentes para la decisión del caso*. En efecto, desde largo tiempo atrás la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), ha sostenido -ya en el año 1964- que: *“Los jueces no están obligados a considerar todas las defensas y pruebas invocadas por las partes, sino sólo aquellas conducentes para la decisión del litigio”* (CSJN, in re: “Benitez, Dermidio c/ Compañía Sansinena S.A.”; “Damiani, César M. c/ Rapaport, Samuel”; “Fernández, González y Tacconi, S.R.L. c/ Madinco S.R.L.”; Torulice o Tortolice, Francisco c/ Blass del Yesso, Domingo”, entre otros, años 1964 publicada en Fallos:

258:304.). Este mismo criterio fue reiterado y ampliado en numerosos pronunciamientos posteriores (y aún está plenamente vigente), y deja muy en claro que *“los jueces del caso no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni a tratar todas las cuestiones expuestas y examinar los argumentos que, en su parecer, no sean decisivos”* (CSJN - in re: “Ogando, Adolfo - Suc.- c/ Barrenechea, María”, 24/03/1977, Fallos: 297:222; “Traiber c/ Club Atlético River Plate” del 04/07/2003, Fallos: 326:2235, entre muchos otros).

5.1.- Asimismo, antes de adentrarme al análisis y resolución de la presente cuestión, estimo necesario recordar que la carga de la prueba actúa como un imperativo establecido en el propio interés de los litigantes. Es por cierto una distribución, no del poder de probar, que lo tienen las dos partes, sino una distribución del riesgo de no hacerlo. No supone, pues, ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante que se verá beneficiado, o perjudicado, en la medida que cumpla, o no, con la carga procesal respectiva.

Como toda carga procesal, esa actividad es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los *“hechos controvertidos”* y supone un imperativo del propio interés de cada litigante, dado que el juez realiza, a expensas de los elementos probatorios aportados a la causa, la reconstrucción de los hechos invocados, descartando aquéllos que no hayan sido objeto de demostración en la medida necesaria.

Al respecto, nuestra Corte Local ha expresado: *“El art. 302 del CPCyC es claro en cuanto a que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido y que cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión”* (Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral y Contencioso Administrativo - in re: “Toscano Carlos Alberto vs. Mario Cervice e Hijos SACIAFI S/ Cobro de Pesos” - Sentencia 1183 del 15/08/2017).

5.2.- Ahora bien, el análisis de las pruebas producidas en autos me permite adelantar que la parte actora no ha probado de manera fehaciente la fecha de inicio que manifestó en su escrito inicial.

En primer lugar, he de destacar que la parte actora inició demanda en contra de Ortiz Repuestos SRL, y si bien mencionó que Enrique Cesar Ortiz que figuraba como titular del establecimiento desde el comienzo de la relación (Febrero/92) hasta el día 01/09/08 en que la demandada pasó a figurar como titular de la relación y del negocio, no surge de las constancias de autos la “continuación” a la que hace referencia, ni siquiera una cesión en la transferencia del contrato. Por el contrario, hace presumir que existieron dos relaciones laborales con dos empleadores distintos. Sobre esto me referiré infra.

Ahora bien, si bien de las constancias de autos surgen recibos de sueldo (fs. 62/67) a nombre del actor en donde consta fecha de ingreso 02/1992, los mismos llevan el sello de **“EL E.C.O.”** de Enrique Cesar Ortiz con domicilio en calle San Juan 1198, que no fue mencionado por el actor en su escrito inicial ni mencionó que relación tenía con éste.

Por otro lado, del informe de AFIP sobre los Aportes Previsionales del actor (fs. 313/320) surge que el primer realizado por “Sucesión de Ortiz Enrique Cesar” fue realizado en fecha 07/1994 -distinto a Febrero 1992 mencionado por el actor- y que el último fue en el 04/2007, para luego volver a aportar en 09/2008 a nombre de Ortiz Repuestos SRL, por lo que hubo un lapso de aproximadamente dos años y 5 meses en los que el actor no realizó aportes, lo que hace presumir no solo que el Sr. Alderete dejó de prestar servicios para un empleador, para luego comenzar una nueva relación con el otro, sino que también hacen restar valor verídico sobre sus dichos acerca de que el Sr. *“Alderete ingresó a trabajar para la demandada en el mes de Febrero del año 1992, desempeñándose en forma **continuada e ininterrumpida** hasta el cese de la relación laboral producida en fecha 29/05/2013 por despido indirecto configurado por exclusiva culpa de la accionada”* (Fin transcripción del escrito de demanda, 2do párrafo, fs. 3).

Continuando con el análisis, si bien los testigos que comparecieron en autos no fueron tachados por la parte demandada, su falta de concordancia entre sus exposiciones con la postura del actor no me permite darle razón a éste último. Así, al momento de preguntarles desde que fecha trabajó el actor para la demandada (pregunta n° 4 del cuestionario de fs. 242), el testigo Gutiérrez Walter Gustavo (fs. 251) contestó “yo hace mucho que voy a comprar ahí, no se darle una fecha, fácil hace **18 años**”. Por su parte, el testigo Coronel Ángel Arnaldo (fs. 252) contestó “Aproximadamente **20 años**, no tengo la fecha exacta”. Por último, el testigo Paz Orlando Marcelo (fs. 267) contestó “yo entré a trabajar desde el **año 1992**, desde ese año lo empecé a ver, la última vez que lo vi fue en el año 2013.”

Así las cosas, los testigos manifiestan tres fechas distintas. Gutiérrez dijo haberlo visto en el año 1998 (cálculo realizado teniendo en cuenta los 18 años que mencionó menos el año 2016 en que se tomó la audiencia testimonial); Coronel dijo verlo en el año 1996 (20 años menos de la fecha del audiencia); y el testigo Paz fue el único que coincidió con la fecha pretendida del actor (1992), pero el mismo no resulta, a mi criterio, suficiente para salvar las contradicciones de los otros testigos, como así tampoco lo mencionado precedentemente acerca de la documentación de AFIP y los aportes previsionales del actor, que empezaron en fecha 1994. Asimismo, conforme se analizó y la propia actora reconoció en su escrito de demanda, el Sr. Alderete prestó servicios siempre en el mismo lugar sito en calle San Juan 1198 -lo que justificaría que los testigos hayan visto al actor trabajando en ese lugar en distintas fechas- pero que no indica que haya sido siempre para el mismo empleador.

Por otro lado, de lo informado por el Registro Público de Comercio surge que Ortiz Repuestos SRL se constituyó en fecha 23/10/07 -coincidiendo con la postura de la accionada-, no surgiendo de las constancias de autos prueba alguna que permita concluir que el actor trabajó para Cesar Ortiz y su contrató luego continuó, o se transfirió, con Ortiz Repuestos SRL.

En conclusión, el análisis efectuado me permite determinar que el actor tuvo una relación de trabajo con Enrique Cesar Ortiz hasta el año 2007 en que se produjo su defunción (conforme acta de fs. 102) y que después inició una nueva relación laboral con Ortiz Repuestos SRL., ya que si bien la demandada y el Sr. Ortiz realizaron su explotación comercial en el mismo domicilio, son personas jurídicas distintas. Asimismo, no existen en autos pruebas fehacientes y contundentes que me permitan determinar que el actor trabajó de manera continuada e ininterrumpida desde el año 1992 como pretende en su escrito de demanda. Por ello, y teniendo en cuenta lo mencionado en párrafos anteriores, considero que se ajusta a derecho determinar que el Sr. Alderete trabajó para Ortiz Repuestos SRL desde el día **01/07/08**. Así lo declaro.

5.3.- Respecto a la **jornada laboral**, el actor manifestó haber trabajado de 8 a 12:30 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 8:30 a 13. Encontrándose deficientemente registrado como empleado de jornada parcial. Por su parte, la demandada se limitó a argumentar que el actor se desempeñaba bajo la modalidad de media jornada y no completa como manifestó el accionante.

Planteada así la cuestión, considero relevante destacar en primer lugar, que **la jornada se presume a tiempo completo**, por lo que invocando la demandada una jornada diferente (sea mayor o bien reducida como en el caso de autos) es a ella a quien le corresponde la carga de probar el motivo que justifique una jornada inferior a la completa.

Lo que debe quedar claro es que la regla general en esta materia, es que el contrato de trabajo se celebra para ser cumplido en “*jornada completa*”, y quien invoca una excepción a dicha regla (“jornada excepcional o reducida”), tiene la carga procesal de acreditar su posición, con “*prueba fehaciente*”; o *elementos probatorios suficientes, que justifiquen dicha posición excepcional*.

Surge claro del artículo 198 LCT, **que la jornada normal de trabajo -máxima legal a decir del art. 198 citado- es la regla y la reducida la excepción**; reducción que sólo puede ser establecida por las disposiciones legales que reglamenten la materia, por estipulación particular del contrato de trabajo o de los convenios colectivos de trabajo. **Tal estipulación particular debe ser acreditada por el empleador en forma fehaciente, dada su**

excepcionalidad.

En autos, la demandada no sólo no acreditó lo pretendido, limitándose a referir una jornada diferente a la aludida por el actor, sino que también se evidencia de sus dichos, que ni siquiera mencionó los horarios en los que supuestamente se habría desempeñado el actor, ya que solo se limitó a expresar que el actor trabajaba en la “*modalidad de media jornada y no completa*” y nada más.

Al respecto, resulta importante tener en cuenta lo expresamente previsto por el Art. 60, tercer párrafo, del CPL, que exige a la demandada -como carga procesal- la de **“proporcionar su versión de los hechos, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con los invocados en la demanda, a pesar de su negativa”**. En el caso, la falta de precisión de la demandada (sobre el tema de la jornada) impide que se pueda tener por cumplida dicha carga procesal. En definitiva, la demandada no brinda una posición clara y concreta, sobre lo que era la jornada laboral del actor, incumpliendo lo normado por el art. 60 CPL, antes citado.

También es importante tener presente que la carga probatoria de fijar claramente la jornada de trabajo, tiene que ver con las posibilidades reales de probar en contrario, que tiene la otra parte; es decir, en la medida que una parte fije claramente una posición sobre un aspecto o característica de la relación laboral, además de proporcionarle datos al sentenciante para conocer la verdad material, está permitiendo que la contraparte pueda ejercer en el marco de la bilateralidad- el derecho no solo a “contradecir” esa posición clara, sino que además, le permite “probar” la verdad o falsedad de la posición esgrimida. Pero cuando nada se dice, resulta muy difícil a la otra parte ejercer el derecho a producir prueba en contrario.

En consecuencia, y a la luz de lo expuesto de manera genérica y brevemente expresado por la demandada en su responde, considero que -en rigor de verdad- **ha incumplido la carga procesal que le impone el Art. 60, tercer párrafo, del CPL, sobre el tema que nos ocupa (jornada de trabajo)**, correspondiendo aplicar el apercibimiento legal allí previsto, y **presumir que el Sr. Alderete trabajó “jornada completa”**, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del actor probar la jornada que invoca, para lo cual se efectúa el análisis de las pruebas rendidas en relación.

Así, del análisis de los testigos que comparecieron en autos, y que no fueron tachados por la contraparte, cuando se les preguntó acerca de los horarios en que trabajó el Sr. Alderete (pregunta n° 5 del cuestionario de fs. 242vta) contestaron: testigo Gutiérrez (fs. 251) *“Yo siempre iba horario comercial mañana o tarde, los sábados por la mañana”*. A dicha respuesta, se le formuló aclaratoria para que el testigo responda si cuando manifestó haber concurrido en horario comercial mañana y tarde, si en ese horario lo veía al actor, a lo que respondió *“Sí”*. El testigo Coronel (fs. 252) dijo: *“Yo iba a la mañana, o a veces iba a la tarde también estaba”*. Por último, el testigo Paz (fs. 267) contestó *“de lunes a sábados, horario comercial de 8 a 12 y de 16 a 20hs”*.

Así, si bien los testigos no coinciden en los horarios exactos en los que el actor prestó servicios, si son coincidentes en que lo veían mañana y tarde trabajando, por lo que teniendo en cuenta la presunción acerca de que la jornada completa es la regla y la reducida la excepción, considero que se encuentra debidamente probado que el actor no trabajaba en una jornada reducida como pretende la parte demandada.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el reconocimiento de la jornada denunciada por el actor es una extensión superior a la legal, y lo que importaría la realización de horas extras, cabe recordar aquí la doctrina legal sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia local -Sala Laboral y Cont. Adm.- por sent. n° 975 del 14/12/11 en los autos caratulados: *“López Víctor Hugo y otros vs. RossoHnos S.H. s/despido ordinario”* donde se estableció que en materia de horas extras corresponde al trabajador que pretende su reconocimiento la fehaciente acreditación de haberlas laborado.

En tal sentido, no considero que de autos surja la acreditación de modo concreto y positivo de la realización por parte de la actora de la jornada por él denunciada en su demanda, ya que no se desprende de las pruebas rendidas en autos dicha acreditación. En consecuencia y conforme a todo lo ut supra mencionado, considero que laboró en la jornada legal completa de 8 horas establecida en la ley 11.544. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTIÓN: Distracto: causa y justificación.

1.- Resuelta la cuestión precedente, corresponde determinar la causa del despido y la justificación, o no, de la misma. Asimismo, previo al análisis pertinente, considero necesario aclarar que si bien se dieron dos despidos - uno realizado por el actor mediante telegrama N° 331427123 en fecha 29/05/13, y otro por la demandada mediante carta documento de fecha 04/06/13-. el que se analizará es el que sucedió primero en el tiempo, ya que no es posible configurar dos despidos distintos en una misma relación laboral.

2.- Así las cosas, en fecha 24/05/13 la demandada remitió TCL al actor intimándolo a reintegrarse a su lugar de trabajo bajo apercibimiento de ser considerado abandono de trabajo. En igual fecha, el actor remitió TCL a la accionada intimando a que regularice su situación laboral ante la negativa de

permitirle el ingreso a su lugar de trabajo, registrándolo en el libro de remuneraciones, Anses, obra social y sindicato de acuerdo a sus verdaderas condiciones de trabajo, bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido en los términos del art. 242 de la LCT. Asimismo, dejó constancia que la demandada violó el deber de previsión previsto en la LCT, incumpliendo normas elementales que hacen la relación empleado-empleador y obligaciones a su cargo, y habiendo sido objeto de constantes malos tratos, persecuciones y hostigamientos por parte del Sr. Manuel Antonio Ortiz, intimó en forma inmediata en virtud del aludido principio de previsión previsto en la LCT a cesar en su actitud y cumplir con sus obligaciones a su cargo.

Como respuesta al TCL del demandado, el actor en fecha 28/05/13 remitió telegrama rechazando el mismo y ratificó su despacho telegráfico. Negó que puedan intimidarlo a que se presente a trabajar ya que no le permitieron el ingreso a su lugar de trabajo. Por ello, intimó nuevamente a que se le aclare su situación laboral conforme sus verdaderas condiciones de trabajo bajo apercibimiento de los arts. 242 y 246 de la LCT. Asimismo, en fecha 29/05/13 remitió misiva a los demandados rechazando la carta documento de fecha 28/05/13 por ser improcedente, carecer de sentido fáctico y jurídico y ser de mala fe y ratificó sus despachos telegráficos anteriores. Por ello, Por ello, se consideró injuriado y despedido por exclusiva culpa de los demandados en los términos del Art. 242 de la LCT.

En fecha 30/05/13 la demandada remitió carta documento rechazando el TCL del actor y ratificando sus misivas anteriores. Negó que el actor se haya presentado a trabajar como falazmente afirmó y lo intimó nuevamente a hacer ocupación efectiva en su puesto de trabajo. Negó que el accionante pueda darse por injuriado y despedido pues aún se encontraba en reserva su puesto de trabajo. Asimismo, le manifestó que la inasistencia injustificada provoca una deficiencia en el desempeño de sus funciones y constituyen una violación de su parte a los deberes que le imponen los arts. 62, 63, 84, 85 y concordantes de la LCT, por lo que negó que pueda darse por despedido en los términos del art. 242 LCT y que haya habido injuria de su parte. Por último, negó que se le adeuden las indemnizaciones pretendidas por el actor y lo intimó a presentarse en su lugar de trabajo en el plazo perentorio e improrrogable de 24 hs bajo apercibimiento de configurarse un abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT.

Ante ello, el actor remitió TCL en fecha 30/06/13 rechazando la misiva del 30/05/13 del demandado. Ratificó sus telegramas remitidos anteriormente y el despido configurado por su parte. Negó los hechos expuestos por la demandada e intimó nuevamente los rubros adeudados como así también la entrega de la certificación de servicios correspondiente. Como consecuencia de ello, el día 04/06/13 la accionada remitió CD rechazando el telegrama mencionado anteriormente y negó todos los dichos del actor. Asimismo, manifestó que por sus reiterados comportamientos que afectaron seriamente su desempeño de sus funciones llevó a la pérdida de confianza hacia su parte. Por otro lado, su incumplimiento con la obligación de reintegrarse a su puesto de trabajo configuró el despido por justa causa por abandono de trabajo en los términos del art. 242 de la LCT, por lo que puso la liquidación final no indemnizatoria y certificación de servicios a su disposición.

En fecha 05/06/13 el Sr. Alderete remitió TCL rechazando la última misiva del demandado y el despido invocado por ésta. Ratificó sus anteriores despachos telegráficos como así también el despido indirecto configurado por su parte e intimó al pago de las indemnizaciones y entrega de certificación correspondientes. Finalmente, en fecha 06/10/13 remitió un último telegrama intimando por última vez al pago de los rubros indemnizatorios que por derecho le correspondan bajo apercibimiento de los términos del art. 2 de la ley 25.323.

3.- Analizado el intercambio epistolar y las constancias de autos, surge que el actor se dio por despedido por TCL de fecha 29/05/13 (recepionado el 30/05/13 conforme informe del Correo Oficial de fs. 222) por dos causas: a) la registración deficiente del actor según sus reales condiciones de trabajo, y b) la falta de previsión de la demandada incumpliendo normas elementales que hacen la relación empleado-empleador y obligaciones a su cargo, y habiendo sido objeto de constantes malos tratos, persecuciones y hostigamientos por parte del Sr. Manuel Antonio Ortiz.

Así las cosas, cabe destacar que quien decide la ruptura del vínculo laboral tiene la carga de probar la justa causa del distracto (es decir, la existencia de la conducta injuriosa invocada como justificación de dicho acto rescisorio, art. 302 CPTT), debiendo el juez valorar dicha causal a la luz de las reglas de la sana crítica, tomando en consideración el carácter de las relaciones laborales, sus modalidades y circunstancias personales del caso. Esto significa que debe probarse la existencia de un obrar contrario a derecho o un incumplimiento con magnitud injuriosa suficiente como para desplazar el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 LCT).

Ahora bien, en la demanda el actor dijo que cumplía una jornada laboral completa, mientras que la demandada afirma que cumplía

solo media jornada. En mérito a ello, y conforme se declaró en la primera cuestión de ésta resolución (ver punto 5.3) por cuanto el actor efectivamente trabajó una jornada completa, ***considero que corresponde tener por acreditada la injuria del trabajador en cuanto la jornada trabajada por éste era la completa y no la parcial conforme le era abonada y la registrada por la demandada.***

La jurisprudencia que comparto, tiene dicho: “Tal postura asumida por la demandada, **cuando el reclamo del trabajador resulta ajustado a derecho impide la prosecución del vínculo ante la negativa injustificada del laboreo extraordinario y las diferencias de haberes al abonarle como jornada parcial**, ocasionando la injuria prevista en el Art. 242 LCT. Así se considera y propone tener por justificado el despido dispuesto por el trabajador.” (CAMARA DEL TRABAJO - Sala 4 - S/ COBRO DE PESOS - Nro. Sent: 58 Fecha Sentencia: 12/05/2010)

Por lo expuesto, y ante la deficiente registración de la jornada efectivamente trabajada por el actor, considero que el despido indirecto dispuesto éste se encuentra justificado, generándose las indemnizaciones propias de un despido indirecto decidido con justa causa.

Por último, cabe agregar que si bien el accionante también invocó como causal de despido la falta de previsión de la accionada incumpliendo normas elementales que hacen la relación empleado-empedor y obligaciones a su cargo, y por haber sido objeto de constantes malos tratos, persecuciones y hostigamientos, el tratamiento de esta causa resulta abstracta ya que jurisprudencialmente se sostiene que, siendo varias las causales invocadas en la notificación de despido indirecto, la acreditación de alguna de ellas que tenga bastante entidad como injuria, es suficiente para justificar la medida y admitir el reclamo indemnizatorio pertinente (CSJT, Sent. n° 197, 05/04/2010, “Pons Rafael Jerónimo vs. Plásticos La Rioja SA s/ cobro de pesos”).

Por lo tanto, encontrándose probado, conforme el análisis precedente que la empleadora registró deficientemente al Sr. Alderete, resulta justificada la decisión resolutive tomada **por el actor de considerarse despedido en forma indirecta mediante telegrama el día 30/05/13 -conforme a la teoría reipticia imperante en la materia-, lo que hace procedente los reclamos indemnizatorios. Así lo declaro.**

TERCERA CUESTIÓN: Procedencia, o no, de los rubros reclamados.

Resueltas las cuestiones precedentes, resta determinar la procedencia o no de los rubros pretendidos por la actora en su escrito de demanda. Así, los que prosperen deberán ser calculados conforme a la categoría que el Sr. Alderete al momento del despido -Vendedor “B”- conforme al CCT 130/75 aplicable a la relación más sus adicionales (presentismo y antigüedad). En consecuencia, corresponde analizar rubro pretendido por separado.

1) Indemnización por Antigüedad: Este rubro pretendido resulta procedente en atención a que la extinción del vínculo laboral se produjo mediante despido indirecto justificado, y su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia, tomando como base de cálculo la remuneración correspondiente según la categoría Vendedor “B” del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 aplicable a la relación (art. 245 LCT), la fecha de ingreso **01/07/08** y la fecha de egreso **30/05/13**, computándose una antigüedad de 4 años 10 meses y 30 días. Así lo declaro.

2) Preaviso: Conforme surge de las constancias de autos el rubro reclamado resulta procedente atento a lo dispuesto por los arts. 231 y 232 de la LCT ya que el despido indirecto fue justificado. Su cuantía se determinará en la planilla que forma parte de la presente sentencia, conforme las pautas antes mencionadas. Así lo declaro.

3) SAC s/ Preaviso: Con respecto a la incidencia del SAC sobre el preaviso, y conforme lo establecido por la CSJT en su fallo “Domínguez Rodolfo vs. Vicente Trapani” (sent. nro. 107 del 07.03.12) sobre el modo de su consideración, el mismo se lo adiciona en la planilla de cálculos en base a su incidencia sobre el preaviso admitido. Así lo declaro.

4) Diferencias 20 días Mayo/13 y Diferencias de Haberes entre Mayo 2012 y Abril 2013 inclusive: En relación a este rubro la jurisprudencia tiene dicho que cuando se pretenden diferencias de salarios, se requiere como punto de partida, pautas mínimas suficientes para que el demandado pueda ejercer válidamente su derecho de defensa y el Sentenciante pueda pronunciarse sobre la validez del petitorio, cuestión esta que la Jurisprudencia la considera casi insoslayable. Es decir, se exige que el actor, al momento de formular la demanda, elabore un específico cálculo de los importes reclamados, con expresa indicación del origen y procedimiento seguido para su determinación, lo que no puede ser suplido cuando se reclama un monto en forma global. En el caso, ese recaudo aparece satisfecho.

En efecto, la parte actora a fs. 12, practica la planilla respectiva (Diferencias Mayo/12 a Abril del 2013), brindando los datos necesarios para interpretar sus reclamos, y para decidir sobre los mismos. Asimismo, se debe tener presente que la remuneración efectivamente percibida por el actor, fue menor que la que le correspondía percibir conforme su jornada completa, conforme lo ya considerado y constancias de autos.

Por lo tanto, existe una diferencia a favor del Sr. Alderete entre la suma que éste percibía mensualmente (según lo declarado) y la que le hubiese correspondido percibir, conforme la escala salarial vigente para su categoría profesional (Vendedor B según CCT 130/75), jornada completa, y durante el tiempo que perduró la ejecución del contrato de trabajo; por lo que corresponde hacer lugar al rubro reclamado por el período mencionado. La liquidación de las diferencias salariales de marras será efectuada en planilla a practicarse en autos, teniendo en cuenta los importes correspondientes -conforme escala salarial del CCT 130/75 aplicable- y teniendo en cuenta las pautas expuestas respecto al contrato de trabajo que vinculó a las partes (categoría, jornada, etc.), y los importes que dijo el actor haber percibido, lo que -insisto- no fue contrarrestado por prueba alguna. Respecto a las Diferencias de los 20 días de mayo/2013, las mismas proceden pero solo en la proporción pagada de menos considerando lo abonado según liquidación final de fs. 30. Así lo declaro.

5) Integración mes de despido: El rubro reclamado deviene procedente atento lo resuelto en los puntos anteriores y teniendo en cuenta la fecha declarada como de distracto en esta sentencia; y su importe será calculado en planilla a practicarse en autos (art. 233 LCT). Así lo declaro.

6) Vacaciones Proporcionales 2013: Este rubro resulta procedente teniendo en cuenta que no se encuentra acreditado en autos su correspondiente liquidación y pago, todo ello, conforme a la planilla de liquidación, con las pautas indicadas.

7) Diferencias SAC proporcional 2013: Atento a lo resuelto en el punto 4) de esta cuestión y habiendo la parte actora cumplido con los requisitos esenciales para la procedencia de este rubro, es que el mismo deviene procedente en la proporción pagada de menos conforme lo indica la liquidación final presentada en el informe de Secretaría de Trabajo presentado en fs. 30. Así lo declaro.

8) Indemnización art. 80 LCT: El art. 3 del decreto nro. 146/01, al reglamentar el Art. 45 de la ley nro 25.345 (que agrega el último párrafo al Art. 80 de la LCT) establece que “El trabajador quedará habilitado para remitir requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la ley de contrato de trabajo nro. 20.744 y sus modificatorias, dentro de los treinta días desde la extinción del vínculo laboral establecido por el artículo transcripto, efectuando una nueva intimación que posea la virtualidad, para habilitar el requerimiento establecido en el art. 80 de la LCT. Por lo que corresponde considerar en esta instancia que la intimación efectuada fehacientemente por el actor habilita la aplicación de la sanción establecida por dicha normativa, en atención a la doctrina legal expuesta en los autos caratulados “Ramos Fabián Alberto vs. Calliera José Alberto S/Cobro de pesos” Sentencia nro 602 del 24/07/2006, en cuanto dispone que resulta ineficaz el requerimiento efectuado por el trabajador para que se le haga entrega del certificado de trabajo, cursado al empleador antes de que transcurra el plazo de 30 días corridos desde la extinción del vínculo (conf. Art. 3 del decreto 146/2001)”.

Habiendo dado el actor cumplimiento con lo prescripto en la normativa arriba mencionada **mediante telegrama de fs. 29 de fecha 08/10/13**, y habiendo la demandada otorgado un Certificado de Servicios erróneo -conforme a las reales condiciones del trabajador- en la audiencia de la Secretaría de Trabajo que consta a fs.30, es que el mismo deviene procedente. En consecuencia, la demandada deberá entregar al actor la Certificación de Servicios y Remuneraciones como así también el Certificado de Trabajo mencionado en dicho artículo conforme a las características de la

relación laboral declaradas en ésta sentencia. Así lo declaro.

9) Indemnización art. 2 ley 25.323: Como requisito necesario para la procedencia de esta indemnización se exige que el trabajador curse una intimación fehaciente al empleador moroso, a los efectos de otorgarle una última oportunidad para que éste adecue su conducta a las disposiciones legales. La mora del empleador en el pago de las indemnizaciones de los trabajadores mensualizados recién se produce luego de transcurridos los cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo, tal como se desprende del juego armónico de los Arts. 128 y 149 de la LCT. Por tal motivo, cabe interpretar que la intimación exigida por la norma legal para que proceda la indemnización del Art. 2 de la Ley 25.323, debe ser efectuada -en el caso de los trabajadores mensualizados- luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo, oportunidad en que recién el empleador se encuentra en mora.

Este criterio ha sido reiteradamente sostenido por esta Excma. Corte Suprema de justicia de Tucumán, habiéndose establecido como doctrina legal el caso caratulado “Barcelona Eduardo J. Vs. Textil Doss SRL/cobro de pesos”: “Es descalificable jurídicamente la sentencia que tiene por cumplidos los requisitos necesarios para que proceda la indemnización del Art. 2 de la Ley 25.323, cuando la intimación al pago de las indemnizaciones de ley fue efectuada conjuntamente con la comunicación en la que dio por extinguido el vínculo laboral”.

Es por ello que considero que la intimación exigida por la normativa mencionada **se encuentra acreditada en la presente Litis mediante telegrama de fs. 29 de fecha 08/10/13;** y por lo tanto este rubro deviene procedente. Así lo declaro.

INTERESES

Teniendo en cuenta lo resuelto a las cuestiones precedentes, corresponde el tratamiento de los intereses a fin de ser considerado para el cálculo de los honorarios de los profesionales intervinientes. Así las cosas, habrá que tener presente la Doctrina Legal sentada por nuestra C.S.J.T. en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 “Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones” donde se ratifica la decisión del Alto Tribunal de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, n° 324 del 15/04/2015, entre otras) y en consideración a que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes, pronunciando la siguiente: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago", este sentenciante considera que deviene razonable la aplicación de dicha tasa en base a lo considerado y a lo dispuesto por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así lo declaro.

PLANILLA

NombreAlderete Mario
Fecha Ingreso01/07/2008
Fecha Egreso30/05/2013
Antigüedad4a 10m 30d
Antigüedad Indemnización5 años
Categoría CCT 130/75Vendedor B
Jornada - Call CenterCompleta

Remuneración a la fecha del Distracto

Sueldo Básico\$ 5.449
Antigüedad\$ 218
Presentismo\$ 472

Sueldo Bruto\$ 6.139

Cálculo Capital e Intereses de Rubros Condenados

Rubro 1: Indemnización por Antigüedad\$ 30.695

$\$6139 \times 5 =$

Rubro 2: Indemnización p/Preaviso\$ 6.139

$\$6139 \times 1 =$

Rubro 3: Sac s/Indemnización p/Preaviso\$ 512

$\$6139 / 12 =$

Rubro 4: Diferencia Días de Mayo 2013\$ 3.584

$\$6139 / 31 \times 30 = \$ 5.941$

$(-) \text{ menos liq.finalfs } 30 - \$ 2.356$

Rubro 5: Integración mes de despido\$ 198

$\$6139 / 31 \times 1 =$

Rubro 6: Vacaciones Proporcionales 2013\$ 1.432

$\$6139 / 25 \times (14 \times 150 / 360) =$

Rubro 7: Diferencia Sac Proporcional 2013\$ 594

$\$6139 / 360 \times 150 = \$ 2.558$

$(-) \text{ menos liq.finalfs } 30 - \$ 1.964$

Rubro 8: Multa Art 80 LCT\$ 18.417

$\$6139 \times 3 =$

Rubro 9: Multa Art 2 Ley 25.323\$ 18.516

$* \text{ Art. 232 Indem. Preaviso } 50 \% \$ 3.070$

$* \text{ Art. 233 Int. Mes Despido } 50 \% \$ 99$

$* \text{ Art. 245 Indem. Por Antig } 50 \% \$ 15.348$

Total Rubros del 1 al 9 en \$ al 30/05/2013\$ 80.088

Tasa Activa BNA en \$ desde 30/05/2013 al 31/03/2021257,84%\$ 206.498

Total Rubros del 1 al 9 en \$ al 31/03/2021\$ 286.586

Rubro 10: Diferencias Salariales (Mayo 2012 a Abril 2013)

PeríodoBasicoAnt.PresentTotal PercibióDif. Recl.%
 Actual.Actual.Dif. Act.
 31/03/21

may-12	\$ 4.251	\$ 128	\$ 365	\$ 4.743	-\$ 1.739	\$ 3.005	276%	\$ 8.305	\$ 11.310
jun-12	\$ 4.251	\$ 128	\$ 365	\$ 4.743	-\$ 1.739	\$ 3.005	275%	\$ 8.258	\$ 11.263
jul-12	\$ 4.251	\$ 170	\$ 368	\$ 4.789	-\$ 1.739	\$ 3.051	273%	\$ 8.338	\$ 11.389
ago-12	\$ 4.251	\$ 170	\$ 368	\$ 4.789	-\$ 1.739	\$ 3.051	272%	\$ 8.290	\$ 11.341
sep-12	\$ 4.251	\$ 170	\$ 368	\$ 4.789	-\$ 1.739	\$ 3.051	270%	\$ 8.243	\$ 11.294
oct-12	\$ 4.251	\$ 170	\$ 368	\$ 4.789	-\$ 1.908	\$ 2.881	269%	\$ 7.740	\$ 10.622
nov-12	\$ 5.000	\$ 200	\$ 433	\$ 5.633	-\$ 1.908	\$ 3.725	267%	\$ 9.948	\$ 13.673
dic-12	\$ 5.000	\$ 200	\$ 433	\$ 5.633	-\$ 1.908	\$ 3.725	266%	\$ 9.891	\$ 13.615
ene-13	\$ 5.000	\$ 200	\$ 433	\$ 5.633	-\$ 1.908	\$ 3.725	264%	\$ 9.833	\$ 13.558
feb-13	\$ 5.000	\$ 200	\$ 433	\$ 5.633	-\$ 1.908	\$ 3.725	262%	\$ 9.776	\$ 13.500
mar-13	\$ 5.000	\$ 200	\$ 433	\$ 5.633	-\$ 1.908	\$ 3.725	261%	\$ 9.717	\$ 13.442
abr-13	\$ 5.000	\$ 200	\$ 433	\$ 5.633	-\$ 1.908	\$ 3.725	259%	\$ 9.660	\$ 13.384
Totales	\$ 62.441	-\$ 22.050	\$ 40.392	\$ 108.000	\$ 148.392				

Total Rubros 1 al 9\$ 286.586

Total Rubro 10\$ 148.392

Total Condena en \$ al 31/03/2021\$ 434.977

COSTAS

En virtud del principio objetivo de la derrota (examinada desde lo cuantitativo y cualitativo), se las impongo en su totalidad a la parte demandada vencida (artículo 105, primera parte del CPCCT, supletorio).

HONORARIOS

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc 2 de la ley 6.204.

A tales efectos y conforme surge de las constancias de autos se procederá a calcular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes teniendo en cuenta lo normado por el art. 50 inc. 2 del CPL.

En virtud de lo expuesto en párrafo anterior, se tomará como base el 50% del monto actualizado de la demanda al 31/03/2021, cuyo total asciende a la suma de pesos \$1.192.291(valor demanda: \$333.191,19 + \$333.191,19 x 257,84%). Ese porcentaje fijado en forma discrecional y razonable (del 50%), está dentro de los parámetros previstos por el art. 50 inc. 2 CPL, arrojando una base regulatoria de pesos \$596.146.

Habiéndose determinado la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los arts. 14; 15, 38, 42, y concordantes de la ley N° 5480, corresponde regular los siguientes honorarios:

A. Por el proceso de conocimiento:

1) Al letrado Alberto Toro, con el patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino, por su actuación en la causa por la parte actora, en el doble carácter, por tres etapas del proceso de conocimiento

cumplidas (inicio de demanda, ofrecimiento y producción de pruebas y alegatos), la suma de \$45.903 (base regulatoria x 14% por el 55% / 3 etapas x 3).

2) A la letrada Luisa Graciela Contino, por su actuación como letrada patrocinante del Dr. Toro, en tres etapas del proceso de conocimiento cumplidas, la suma de \$83.460 (base regulatoria x 14% / 3 etapas x 3).

3) Al letrado Mario Enrique Chehuan Gandur, por su actuación en la causa por la parte demandada como apoderado de la misma, en dos etapas del proceso de conocimiento cumplidas (contestación demanda, ofrecimiento y producción de pruebas) la suma de \$49.281 (base regulatoria x 8% más el 55% por el doble carácter / 3 etapas x 2).

4) A la letrada Graciela Corai por su actuación en la causa por la parte demandada como apoderado de la misma, en una etapa del proceso de conocimiento cumplida (alegatos) la suma de \$24.640 (base regulatoria x 8% más el 55% por el doble carácter / 3 etapas x 1 etapa). Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el art. 38 in fine de la ley de honorarios que expresamente dice: “En ningún caso los honorarios del abogado serán inferiores al valor establecido para una (1) consulta escrita vigente al tiempo de la regulación”, se procederá a regular el mínimo arancelario -una consulta escrita- ello por cuanto la aplicación de los porcentuales de ley, arrojan como resultado un monto inferior al mínimo garantizado por la ley arancelaria. En el caso, la profesional ha cumplido con una etapa del proceso, por lo que corresponde estar a lo previsto en Art. 38 in fine, Ley 5480. En consecuencia le corresponde la suma de \$46.500 (valor de la consulta escrita, doble carácter).

B. Por la incidencia de planteo de revocatoria de fs. 345 (costas impuestas a la demandada vencida art. 305 CPCyC supletorio)

1) Al letrado Alberto Toro siendo ganador en la incidencia de fs. 345, y atento a la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en los autos Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/ Ejecución Hipotecaria sentencia N° 1050 de fecha 01/08/2018, le corresponde la suma \$6.885 (15% de la escala porcentual del art. 59 de la ley arancelaria s/ base).

2) A la letrada Luisa Graciela Contino siendo ganadora de la incidencia de fs.345, y atento a la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en los autos Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/ Ejecución Hipotecaria sentencia N° 1050 de fecha 01/08/2018, le corresponde la suma de \$12.519 (15% de la escala porcentual del art. 59 de la ley arancelaria s/ base).

3) Al letrado Mario Enrique Chehuan Gandur, siendo perdedor de la incidencia de fs. 345, y atento a la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en los autos Banco Macro S.A. vs. Sanatorio Modelo S.A. s/ Ejecución Hipotecaria sentencia N° 1050 de fecha 01/08/2018, le corresponde la suma de \$4.928 (10% de la escala porcentual del art. 59 de la ley arancelaria s/ base).

Por ello,

RESUELVO:

I.- ADMITIR LA DEMANDA promovida por **MARIO GERARDO ALDERETE**, DNI 24.200.455 con domicilio en Entrerios N° 280 El Manantial de ésta ciudad Capital, en contra de **ORTIZ REPUESTOS SRL** con domicilio en calle San Juan N° 1198 de San Miguel de Tucumán. En consecuencia, se condena a éstos al pago total de la suma de \$434.977 (pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y siete) en concepto de **(i)** Indemnización por Antigüedad, **(ii)** Preaviso, **(iii)** SAC s/ Preaviso, **(iv)** Diferencias 20 días Mayo/13, **(v)** Integración mes de despido, **(vi)** Vacaciones Proporcionales 2013, **(vii)** Diferencias SAC proporcional 2013, **(viii)** Indemnización art. 80 LCT, **(ix)** Indemnización art. 2 ley 25.323, **(x)** Diferencias de Haberes entre Mayo 2012 y Abril 2013 inclusive conforme lo considerado

II.- COSTAS: conforme son consideradas.

III.- HONORARIOS: Regular honorarios por su actuación profesional en la presente causa por el proceso de conocimiento: **1)** Al letrado Alberto Toro, con el patrocinio de la letrada Luisa Graciela Contino, por su actuación en la causa por la parte actora, la suma de \$45.903 (pesos cuarenta y cinco mil novecientos tres); **2)** A la letrada Luisa Graciela Contino, por su actuación como letrada patrocinante del Dr. Toro, la suma de \$83.460 (pesos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta); **3)** Al letrado Mario Enrique Chehuan Gandur, por su actuación en la causa por la parte demandada la suma de \$49.281 (pesos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y uno); **4)** A la letrada Graciela Corai por su actuación en la causa por la parte demandada como apoderado de la misma, la suma de \$46.500 (pesos cuarenta y seis mil quinientos), conforme lo considerado.

IV.- HONORARIOS: Regular honorarios por su actuación profesional en la incidencia de planteo de revocatoria de fs. 345: **1)** Al letrado Alberto Toro la suma \$6.885 (pesos seis mil ochocientos ochenta y cinco); **2)**A la letrada Luisa Graciela Contino, la suma de \$12.519 (pesos doce mil quinientos diecinueve); y **3)** Al letrado Mario Enrique Chehuan Gandur, la suma de \$4.928 (pesos cuatro mil novecientos veintiocho), conforme lo considerado.

V.- COMUNIQUESE a la Caja de Previsión y seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán.

VI.- INTÍMESE a la parte demandada a entregar al actor la documentación laboral detallada en el Art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en un plazo de 10 días, bajo apercimiento de aplicación de astreintes.

REGISTRESE, ARCHIVESE Y HAGASE SABER.

Ante mí

NRO. SENT.: 110 - FECHA SENT.: 30/04/2021

Firmado digitalmente por:
CN=JOGNA PRAT Ezio Enrique
C=AR
SERIALNUMBER=CUIL 20176149796
FECHA FIRMA=30/04/2021
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>.